

Pros y contras del Plan ZEN

Coacción no es opresión. Eso lo sabe perfectamente ETA, que ha respondido al Plan ZEN —primera iniciativa global en la lucha contraterrorista— intentando llevar a las conciencias de los ciudadanos vascos la seguridad de que se trata de un nuevo agravio excepcional contra todo un pueblo.

Y no es así; el ZEN es un plan estrictamente dirigido contra los bandidos asesinos de ETA. Sólo contra ellos. Es financieramente ambicioso (15.000 millones de pesetas) y socialmente justificable. Cuenta además con la experiencia alemana e israelí, países en los que estrategias similares han producido efectos positivos. De aquí paradójicamente arranca su posible riesgo; la copia simple de un plan foráneo no daría resultado en el combate contra un terrorismo que se ayuda con la «comprensión» y el apoyo de una parte de la sociedad vasca.

En este sentido, las campañas previstas de aislamiento del terrorista y sus cómplices son trascendentes, siempre que no se hagan indiscriminadamente. Hasta ahora las medidas políticas (Estatuto y transferencias incluidas) no han dado los beneficios deseados. El aislamiento se consigue con una batería de medidas propagandísticas y legales que aportan, sin embargo, a la sociedad democrática un punto de grave preocupación. La consideración que hace este Plan ZEN de la ley Antiterrorista como un texto óptimo al que únicamente debe restarse su carácter excepcional, introduciendo para ello cambios en el Código Penal, no resulta medianamente aceptable para una sociedad libre en la que las medidas extraordinarias tienen escaso encaje jurídico y constitucional.

La zona legal del plan es por esto y por otras preocupaciones que pueden derivarse de la interpretación restrictiva del «habeas corpus» la más débil y menos asumible de un programa que no puede convertirse en un remedo de los estados de excepción franquistas. El plan tampoco puede ser el de un Gobierno solo que, además, ha recogido ideas y sugerencias de administradores pasados. O recibe un respaldo amplio o fracasará política, económica y socialmente. Tendrá nula capacidad operativa si no cuenta con el concurso decidido y valiente del PNV, partido que aún no se ha pronunciado oficialmente.

Otras colaboraciones, las de los Cuerpos de Seguridad del Estado, deben conseguirse también más que imponerse. No basta con cambiar a forzosos imprevistos por voluntarios formados, si no se ofrece a los mejores hombres de estas Fuerzas dignos y estimulantes salarios (ahora no alcanzan las ochenta mil pesetas), condiciones apropiadas de vida (los Cuarteles del norte se asemejan a chabolas tercermundistas), estímulos profesionales de todo tipo y dotaciones técnicas sugestivas.

Todas estas mejoras, inscritas efectivamente en el plan, tienen que hacerse creíbles. Ahora no lo son. El informe que hoy mismo publicamos, junto con las quejas que nos llegan de agentes destacados en el norte, aventuran escaso optimismo. En este aspecto está todo por hacer: los 6.000 millones presupuestados en el plan para instalaciones y los 3.200 para incentivos económicos no nos parecen exagerados. Resultan ser el mínimo exigible.